

Las organizaciones abajo firmantes, expresamos nuestro apoyo a las comunidades de El Salvador y a la sociedad civil organizada en la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica en sus demandas para una solución definitiva -y no solamente temporal- a los problemas y conflictos creados por la minería metálica.

26 de Septiembre 2012

Según las Naciones Unidas, El Salvador es el país ambientalmente más precario y vulnerable en el mundo,¹ con la más alta densidad poblacional en América Latina donde el 98% del agua superficial de El Salvador está contaminada.² Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el país ya está en el último lugar de todos los países centroamericanos respecto a la cantidad de agua per cápita disponible y en el futuro no tan lejano El Salvador enfrentará estrés hídrico.³ Más del 88.7% del territorio nacional es vulnerable a desastres naturales y el 95% de la población vive en zonas de alto riesgo.⁴

El proceso de minería a cielo abierto con lixiviación con cianuro, propuesto por la industria minera en El Salvador utiliza cantidades de agua excesivas. Pacífic Rim, una empresa con sede en Vancouver que pretende desarrollar un proyecto minero en el departamento de Cabañas, estima que su proyecto ocupará casi los 900,000 litros de agua al día solo en el proceso de lixiviación.⁵ Para 2012, según el Ministerio de Economía de El Salvador, habían 42 proyectos mineros propuestos. De ser aprobados, utilizarían más de 37 millones de litros de agua *al día*, equivalente al agua consumida diariamente por casi medio millón de familias salvadoreñas, según el consumo promedio de agua de una familia en las áreas rurales en El Salvador.⁶

La industria minera ha sido señalada en varias ocasiones como una de las industrias más contaminantes del mundo. Por ejemplo, en el informe publicado en julio del 2012, el Relator Especial de Derechos Humanos y Tóxicos de las Naciones Unidas documentó los impactos en derechos humanos de sustancias y desechos peligrosos de la industria minera.⁷ Según la Agencia de Protección Ambiental de los EEUU, desde el 1998 al 2010 la actividad minera en los Estados Unidos aportaba el 36% de todos los desechos tóxicos emitidos en el país, y más que cualquier otra industria.⁸ El Río San Sebastián, ubicado en el oriente de El Salvador, es un ejemplo claro de la contaminación que dejan las empresas mineras. En el 2012, el Ministerio de Medio Ambiente de El Salvador informó que el río tiene niveles de cianuro nueve veces más que el límite aceptable y niveles de hierro mil veces más que el estándar establecido, como resultado directo de operaciones mineras que alcanzaron su época de mayor explotación entre los años 1930 y 1950.⁹

En vista de esta realidad alarmante, las organizaciones de la sociedad civil y comunidades afectadas que aglutinan a la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica (la Mesa) han mostrado su fuerte oposición a los proyectos mineros en El Salvador. La Mesa representa a cientos de comunidades y miles de personas a lo largo de El Salvador y ha recibido reconocimiento nacional e internacional por su trabajo en protección del medioambiente, derechos humanos y defensa de la soberanía nacional.

¹ United Nations Disaster Assessment and Coordination, "[Evaluación de la Capacidad Nacional para la Respuesta a Emergencias](#)" 2010.

² Ministry of Environment and Natural Resources, El Salvador, "[Resultados del Informe de la Calidad de Agua en los ríos de El Salvador](#)" 2010.

³ Comisión Económica para América Latina y el Caribe, "[La Economía del Cambio Climático en Centroamérica: Reporte técnico](#)" 2011

⁴ United Nations Disaster Assessment and Coordination, "[Evaluación de la Capacidad Nacional para la Respuesta a Emergencias](#)" 2010.

⁵ Moran, Robert and Michael Moran, "Revisión [Técnica del Estudio de Impacto Ambiental \(EIA\) del Proyecto Minero El Dorado, El Salvador](#)" 2005.

⁶ Ministry of the Economy, El Salvador, "Empresas que han solicitado licencia de exploración ante la Dirección Reguladora de Hidrocarburos y Minas del MINEC, que fueron aprobados y con vigencia posterior al 2002." 2012.

⁷ Report of the Special Rapporteur on the human rights obligations related to environmentally sound management and disposal of hazardous substances and waste, Calin Georgescu, A/HRC/21/48 (July 2, 2012)

⁸ U.S. Environmental Protection Agency "Toxic Release Inventory" 2010.

⁹ Ministry of the Environment and Natural Resources, El Salvador, "[MARN Confirma Presencia de Cianuro y Hierro en Río San Sebastian, La Unión](#)" 2012.

Con los años, la Mesa ha obtenido apoyo de funcionarios públicos, líderes religiosos y hasta líderes empresariales quienes han expresado su oposición a la minería. Recientemente, el Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño firmó una declaración afirmando “rechazamos categóricamente la política extractivista depredadora de las transnacionales.”¹⁰ En el 2007, La Universidad de Centro América publicó una encuesta que demostraba que el 62.5% de la población en las zonas afectadas por la minería creía que la minería no era una industria viable para El Salvador.¹¹

En el 2007, cuando el gobierno de El Salvador empezó a restringir la industria minera, como resultado de los esfuerzos de la Mesa y otros sectores de la sociedad civil, dos transnacionales mineras, Commerce Group y Pacific Rim, respondieron empezando litigios contra el gobierno. Las empresas alegan que sus derechos como inversionistas están siendo violentados. Estas demandas se llevan a cabo a través de provisiones para protecciones para inversionistas contempladas en leyes nacionales y tratados de libre comercio, como el CAFTA-DR, ambos apoyados por el gobierno de los EEUU y organismos multilaterales. Durante el proceso de arbitraje, cada una de las demandas, las cuales suman más de \$200 millones de dólares, es conocida y decidida por tres árbitros del Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias de Inversiones (CIADI), parte del Banco Mundial. A nivel regional, una tercera parte de los 137 casos pendientes en el CIADI tiene que ver con industrias extractivas y la mitad van en contra de gobiernos de América Latina. Esto representa un aumento dramático de los tres casos pendientes ante el tribunal hace doce años.¹²

Después de años de consulta popular y análisis científico, la Mesa ha llegado a la conclusión de que, “Si [al gobierno] verdaderamente le importa garantizar la sustentabilidad y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, en lugar de buscar una salida superficial [...], debería promover la prohibición de la minería metálica a través de una nueva Ley de Minería explícita en ese sentido, justificada en la profunda crisis socio ambiental que padecemos y cuya tendencia actual es agravarse aceleradamente.” En el 2006, la Mesa presentó una propuesta de Ley a la Asamblea Legislativa que prohibiría definitivamente toda la minería metálica en El Salvador. Mientras la propuesta goza de apoyo amplio de la población, todavía faltan los votos necesarios para aprobarse en la Asamblea Nacional.

Sin embargo, el gobierno salvadoreño también presentó una propuesta de legislación en el tema minería en el 2012, lo cual propone suspender de manera temporal todos los procesos administrativos relacionados con las concesiones mineras y que las organizaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica consideran es insuficiente. La propuesta de Ley establece que la suspensión se podría levantar cuando un comité de revisión conformado por 10 personas, nombradas por la Secretaría Técnica de la Presidencia, acuerde que las condiciones necesarias para la minería en El Salvador se han cumplido. En el futuro cercano o lejano, si fuera electo un presidente salvadoreño que estuviera a favor de la minería, la propuesta de ley contempla pocos obstáculos en la conformación de un comité de revisión pro-minería y para la revocación de la suspensión, sin que las condiciones socio-ambientales necesarias para la minería hayan sido alcanzadas.

Dado la amenaza que la minería metálica presenta a las fuentes de agua, el medioambiente y a la salud pública en este país densamente poblado, así como por los peligros que los ataques corporativos de Commerce Group y Pacific Rim presentan a la gobernabilidad democrática, las organizaciones abajo firmantes exhortan a **los tomadores de decisión en El Salvador a reconocer la experiencia y amplia representatividad de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica y a que consideren con seriedad las propuestas de la Mesa con respeto al diseño de políticas públicas del sector de minería metálica en El Salvador.**

Firmado,

¹⁰ [Declaración Cushtacán](#). 2012

¹¹ Instituto Universitario de Opinión Pública Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, “[Encuesta sobre conocimientos y percepciones hacia la minería en zonas afectadas por la incursión minera en El Salvador](#)” 2007

¹² Anderson, Sarah, J. Alejandro Artiga-Purcell, Rebecca Dreyfus, and Maneul Perez-Rocha, “[Mining for Profits in International Tribunals](#)” 2011.